

# SÁNCHEZ MULTIPLICA CASI POR CUATRO LAS AYUDAS DIRECTAS A LOS SINDICATOS

UGT y CC.OO. se han mantenido leales al Gobierno en tres legislaturas, en las que han pasado de recibir 8,8 millones de euros anuales en subvenciones a 32 millones

Susana Alcelay  
Madrid



El Gobierno ha tenido problemas con la corrupción, con la invasión de Ceuta y con sus socios; ha tenido problemas con el independentismo catalán y también con las empresas, pero su relación con los sindicatos ha sido un remanso de paz durante tres legislaturas. No han protestado ni por medidas que atentaban contra sus intereses, como la cesión al nacionalismo vasco de la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales, ni tampoco por el goteo de injerencias en la negociación colectiva con una lluvia fina de enmiendas al Estatuto de los Trabajadores realizadas al margen del diálogo social. Casi 300 cambios de la norma laboral se han realizado por la puerta de atrás y ni una crítica se ha producido.

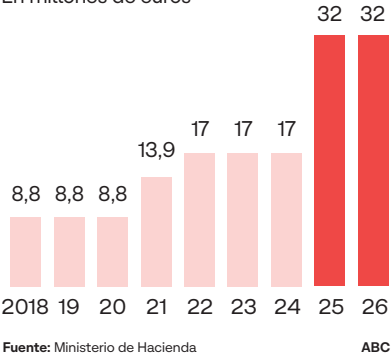
El letargo de UGT y CC.OO. se ha visto interrumpido con la convocatoria de una huelga general insólita el 11 de noviembre, la primera en 14 años, para reclamar vivienda y sueldos dignos. Esos problemas no son nuevos. En los últimos ocho años han ido a peor; la oferta inmobiliaria se ha comprimido ante la inseguridad regulatoria y los precios se han disparado, mientras que el sueldo anual más frecuente se ha situado en 16.520 euros, una renta raquítica combinada con una fuerte inestabilidad, con contratos temporales que duran una media de 37 días y contratos indefinidos que se frustran en el periodo de prueba. Pero los sindicatos han entendido que ahora sí toca movilizarse, a las puertas de unas elecciones generales. Ni el propio Ejecutivo niega que se trata de una huelga política. «Es contra la oposición», aseguró la vicesecretaria general de PSOE y coordinadora

estratégica de la campaña socialista, María Jesús Montero.

No fueron tan condescendientes con el Gobierno de Mariano Rajoy, al que ni le dieron el beneficio de la duda y le convocaron una huelga general a los 98 días de llegar a la Moncloa, el 29 de marzo de 2012. A los pocos meses, el 14 de noviembre, llegó la segunda, esta vez para protestar por la reforma laboral que, en esencia, ha mantenido el Eje-

### Ayudas directas a los sindicatos

En millones de euros

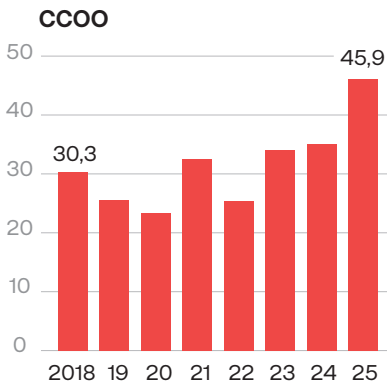


Fuente: Ministerio de Hacienda

ABC

### Subvenciones de los dos sindicatos principales

En millones de euros



Fuente: Ministerio de Hacienda

cutivo. Frente a las protestas que marcaron aquel mandato, desde que gobierna Sánchez UGT y CC.OO. han asegurado la paz social y se han convertido en el mejor aliado del Ministerio de Trabajo, lo que ocurría a la vez que recibían golosas ayudas del Estado.

Con este Ejecutivo los grandes sindicatos han multiplicado casi por cuatro las subvenciones directas que reciben, que han pasado de los 8,8 millones que percibían con Mariano Rajoy a los 32 millones actuales. En conjunto las ayudas públicas recibidas por UGT y CC.OO., sus organizaciones territoriales, federaciones y fundaciones vinculadas, superaron los 569 millones entre 2018 y 2025, según el análisis de los listados anuales de grandes beneficiarios de Hacienda. Desde que gobierna Pedro Sánchez estos fondos han crecido un 34%; comenzaron en 69,6 millones y en 2025 llegaron a los 93,7 millones. «Es el mejor de la historia de España», dijo sin disimulo Pepe Álvarez del Gobierno de Sánchez a finales de 2025. «España –señaló– ha avanzado como no había avanzado nunca».

El pasado año, coincidiendo con el apoyo a medidas como la frustrada jornada de 37,5 horas o el registro horario la dos centrales vieron como los recursos directos que reciben del Estado se disparaban un 25%. Cuando Yolanda



Pedro Sánchez y Yolanda Díaz con Pepe Álvarez y Unai Sordo en la firma de la subida del SMI. Efe

Díaz accedió al cargo, a comienzos de 2020, el gasto anual en subvenciones era inferior a nueve millones, un año después ya había aumentado un 58%, hasta 13,9 millones. Álvarez y Sordo han sido los escuderos de la ministra, también cuando decidió que no necesitaba al mundo empresarial y que sus aliados naturales, UGT y CC.OO. eran suficientes para sacar adelante su (frustrada) agenda reformista, que coincide, en esencia, con la exigencias de los dos dirigentes, al que le unen lazos muy estrechos. Díaz no esconde esa sintonía con las centrales, que se ha manifestado no sólo en las mesas de negociación, también en las marchas del Primero de Mayo, con su presencia y apoyo junto a otros miembros del Gobierno, que algún ejercicio se contaron por decenas.

### Un capítulo por escribir

Enredadas en un batalla ideológica, las empresas llevan siendo la diana elegida por la ministra de Trabajo, con apoyo sindical, desde que la patronal alzó la voz contra unas medidas que consideraba malas para España. Poco a poco se fue larvando un clima de malestar en el diálogo social que terminó arrui-



nando cualquier posibilidad de entendimiento a tres bandas. El último capítulo está por escribir: la subida del SMI, con un alza que según UGT y CC.OO. deberá ser «al menos» del 7% hasta dejarlo por encima de 1.300 euros.

Las ayudas públicas se han convertido en un balón de oxígeno para el funcionamiento de las grandes centrales sindicales teniendo en cuenta la baja afiliación. Ayuda también que CC.OO. y UGT están utilizado gratuitamente 58 edificios cedidos por el Estado en virtud de la Ley de Patrimonio Sindical Acumulado de 1986, una norma que no se ha actualizado desde entonces, que buscó la devolución de los edificios incautados por la dictadura, de que disfrutaban también el resto de sindicatos y la patronal. El mantenimiento de estos inmuebles corre a cargo de los beneficiarios, no así las cargas tributarias como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) por ser los edificios pro-

**Cuando Yolanda Díaz accedió al cargo el gasto anual en subvenciones era inferior a nueve millones, un año después ya había aumentado un 58%**

piedad del Estado, que también hace frente a la rehabilitación de las fincas, como ocurrió en 2021. Ese año el departamento que dirige Yolanda Díaz dispuso cien millones de los fondos europeos para la renovación energética de 42 sedes sindicales.

Como avanzó este diario, esos 58 inmuebles se reparten así: 33 para Comisiones y 25 para UGT. En conjunto suponen unos pagos por el IBI a cargo del erario público de al menos 700.000 euros, ya que la respuesta de Trabajo no facilita este dato para cinco edificios. Los metros cuadrados totales de las cesiones ascienden a 22.856, y su valor de mercado, atendiendo a la media del precio de cada zona y al uso de los edificios, superaría los 200 millones, según cálculos realizados por una gran inmobiliaria para este diario.

Toda España está salpicada de edificios sindicales y empresariales que son cedidos, muchos de ellos situados en zonas estratégicas de las ciudades: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla... Algunos edificios son la sedes de UGT en Avenida de América, en Madrid, o la de CC.OO., en la Avenida de la Raza en Sevilla. A la poca transparencia del Ejecutivo sobre este parque de edificios se une su falta de actualización, lo que ha generado tensiones en algunas organizaciones sindicales y entre fuerzas políticas autonómicas con el Gobierno.

## Afiliación bajo mínimos y con movimientos combativos en auge

S. Alcelay  
Madrid

Algo se mueve en el sindicalismo. Comienzan a surgir movimientos como el Sindicato de Inquilinas, combativos, capaces de movilizar la calle y con pulso para convocar una huelga general. Son organizaciones más pequeñas que se han convertido en una amenaza para el sindicalismo mayoritario, anclado en los últimos años en políticas de despacho. «Empieza un nuevo ciclo político, donde el sindicalismo de base, el poder popular marca el programa de lucha y la forma organizativa», dijo la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, cuando hizo oficial la convocatoria del 11-N. Lo hacía flanqueada por miembros de centrales más pequeñas como la CGT, CO.BAS, que nació en 2000 tras una escisión de CC.OO., y Solidaridad Obrera, cuyos miembros se desligaron del sindicato anarcosindicalista a finales de los años 80.

Tenían muy claro que el paro de 24 horas se convocaría con o sin ellos, en alusión a UGT y CC.OO., y así lo hicieron. Ni Pepe Álvarez ni Unai Sordo salieron en la foto, pero sí terminaron sumándose a una iniciativa que no era suya, aunque insisten en que ya estaban fraguando la protesta.

El resurgir del sindicalismo alternativo, de base popular, se produce en un momento en el que apenas uno de cada diez trabajadores está afiliado a un sindicato en España. Una de

las últimas ediciones de ‘Focus on Spanish Society’, de Funcas, avisó de que nuestro país corre «el riesgo de que gran parte de la población asalariada quede poco representada en el diálogo social». Según la OCDE, en 2023 –última cifra disponible– un 12,5% de los asalariados españoles estaban en las filas de un sindicato, cuatro puntos menos que en apenas una década (desde el 16,7% de 2012) y el segundo peor dato en lo que llevamos de siglo (tras el 12,4% de 2019).

### Por debajo de la media

Las cifras contrastan, por ejemplo, con las de Suecia, donde la representatividad está en el 65,9% de la fuerza laboral, o Italia, con un 30%. La última oleada del International Social Survey Programme (ISSP), una estadística elaborada por varias universidades (con una metodología distinta a la OCDE), apuntaba que España está ocho puntos por debajo de la media de la UE, con un 18% de sindicación, frente a un 26,3% en el espacio comunitario.

Pero el problema no es exclusivo de nuestro país. A excepción de los escandinavos y Austria, el resto de los Estados miembro muestran porcentajes por debajo del 20% en la estadística del ISSP. Y tampoco la tendencia a la baja es única de España, pues la OCDE apunta retrocesos en participación sindical en buena parte de los países de la UE, entre ellos Alemania, que ha pasado de un 22% en 2000 al 14,1% en 2024.

### Evolución de la afiliación sindical

Porcentaje de trabajadores asalariados miembros de un sindicato (1978-2023)

